



**RESOLUCIÓN No. 2014-452223 DEL 30 DE ABRIL DE 2014**  
**FSC-GM000000064**

*"Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011".*

**LA DIRECTORA TÉCNICA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**

Atendiendo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4155 de 2011, el Decreto 4800 de 2011, el Decreto 4802 de 2011, la Resolución No. 1674 de fecha 31 de julio de 2012 y

**CONSIDERANDO**

Que la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011 determinaron como función de la Dirección de Registro y Gestión de la Información, *"decidir la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas y resolver los recursos de la vía gubernativa de su competencia"*

Que de conformidad con el artículo 152 de la Ley 1448 de 2011, son sujetos de reparación colectiva los grupos y organizaciones sociales y políticos, las comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común.

Que el artículo 227 del Decreto 4800 de 2011 establece como competencia de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, identificar los sujetos de reparación colectiva que han sido objeto de graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al DIH ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, a través de dos modalidades: por oferta del Estado y por demanda. En el caso de oferta, la identificación se hace con base en ejercicios de georreferenciación de hechos victimizantes, de identificación de comunidades, poblaciones o grupos sociales vulnerables y excluidos, de análisis de bases de datos, informes e investigaciones.

Que en cumplimiento del artículo 151 de la Ley 1448 de 2011, la Unidad realizó invitación para ser parte del programa de Reparación Colectiva a la Comunidad de los cinco corregimientos del municipio de Simití (Bolívar), la cual fue aceptada el día 6 de julio de 2013 con la conformación del Comité de Impulso.

Que la Comunidad de los Cinco Corregimientos de Simití está conformada por los corregimientos de Monterrey, San Blas, Paraiso, Santa Lucía y San Joaquín, ubicados en el municipio de Simití, perteneciente al departamento de Bolívar. Esta comunidad se caracteriza porque sus habitantes comparten una identidad derivada de haber compartido unas costumbres, un reconocimiento social, un territorio común, una historia común y haber generado bienes en forma comunitaria, entre otros.

Que, **CESAR NORBEY GONZALEZ VELASQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **3984946** rindió declaración ante La Unidad Para La Atención y Reparación a las Víctimas el día 20 de noviembre de 2013, para que de acuerdo a los artículos 3 y 156 de la Ley 1448 de 2011, y al procedimiento de registro contenido en el Capítulo II, del Título II, del Decreto 4800 de 2011, se le inscriba en el Registro Único de Víctimas – RUV.

Que, **CESAR NORBEY GONZALEZ VELASQUEZ** declaró los siguientes eventos que generaron daños colectivos a su comunidad: **Confinamiento y/o Restricción a la Libre Circulación, Vulneración por parte de Actores Armados de Bienes Públicos Protegidos, Vulneración del Derecho a la Seguridad, Restricciones a la Vida Organizativa, Impedimento o Restricciones a la Realización de Prácticas Sociales, Económicas o Culturales, Daños a la Propiedad Colectiva, Daños a Recursos Naturales, Minas en el Territorio, Fosas Comunes**, en la forma y oportunidad legal establecida en los artículos 156 de la Ley 1448, y artículos 26, 27 y 33 del Decreto 4800 de 2011.

Que la Administración al analizar los hechos victimizantes acudirá a la evaluación de los elementos jurídicos, de contexto, y técnicos que le permitan fundamentar la decisión.

Que la valoración se fundamenta en tres presupuestos jurídicos, que son: i) La obligación de interpretar los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, de conformidad con los tratados





Hoja número 2 de la Resolución No 2014-452223 del 30 de abril de 2014: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011".

internacionales ratificados por Colombia<sup>1</sup>, ii) los principios de buena fe, favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial, entre otros<sup>2</sup> y iii) el principio de enfoque diferencial<sup>3</sup>.

Que respecto a los elementos de contexto, se consultará información sobre dinámicas, modos de operación y eventos relacionados directamente con el conflicto armado en la zona y tiempo específicos, que permitan evidenciar la situación de orden público al momento de la ocurrencia de los hechos.

Que frente a los elementos técnicos, se tendrá en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos objeto de análisis, para lo cual se realizarán consultas en las bases de datos y sistemas que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de Víctimas, así como en otras fuentes que se estimen pertinentes.

Que se considerarán víctimas para los efectos de la Ley 1448 de 2011, según su artículo 3 "(...) a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (...)".

Que el territorio del municipio de Simití es considerado estratégico por los grupos armados ilegales por cuatro razones. En primer lugar, posee unas condiciones climáticas favorables para el cultivo de coca y la producción de estupefacientes. En segundo lugar, es un municipio que limita con la Serranía de San Lucas por el occidente y tiene contacto con el río Magdalena por el oriente. En tercer lugar, en Simití existe una gran cantidad de yacimientos auríferos. En cuarto lugar, la Serranía de San Jacinto hace parte de una serie de rutas usadas para el tráfico de narcóticos e insumos para el desarrollo del conflicto armado hacia el oriente y el occidente del país.

Que los grupos armados ilegales ven en Simití un lugar favorable para trasladarse a distintas zonas del país. De una parte, desde el municipio es posible la movilización a través del río Magdalena. De otra, Simití es considerado parte de una ruta que conecta al Caribe colombiano con el Catatumbo, y desde allí con Venezuela. Adicionalmente, el municipio permite a los grupos armados ilegales conectarse con el Bajo Cauca, el Nudo del Paramillo y la zona del Urabá Antioqueño, todas las cuales también son zonas ricas en recursos naturales. Todo esto sin ignorar la gran cercanía de Simití con la zona de los Montes de María, que también es parte de un corredor de movilidad de productos ilegales que va desde Sincelejo (Sucre) hacia Venezuela, atravesando los Montes de María, Magdalena, Cesar y La Guajira.

Que debido a los elementos anteriores sumado a otros de carácter sociopolítico tales como una débil presencia estatal durante gran parte de la historia de Simití, en los últimos cuarenta años ha habido presencia de grupos armados ilegales que han mantenido una lucha armada constante por el dominio de las vías y potencialidades que ofrece esta zona del país. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha hecho presencia en el departamento desde la década de los sesenta, con particular incidencia desde 1972, con el frente Héroes y Mártires de Santa Rosa. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han tenido presencia desde la década de los ochentas con el frente 24, perteneciente al bloque Magdalena Medio. Finalmente, los grupos de autodefensas estuvieron en la zona desde mediados de los ochentas, llegándose a unir en 1997 con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Que por la coexistencia de dichos actores se han generado afectaciones individuales, colectivas e individuales con impacto colectivo sobre la comunidad de los cinco corregimientos de Simití, a través de reiteradas violaciones a los Derechos Humanos de sus habitantes, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Atendiendo a esta situación, algunos de los hechos emblemáticos que han generado afectaciones colectivas a la comunidad se describirán a continuación, sin que esto signifique que se ignoren la multiplicidad de perjuicios generados por parte de grupos armados ilegales sobre la comunidad.

<sup>1</sup> El artículo 93 de la Constitución Política establece: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."

<sup>2</sup> El artículo 19 del Decreto 4800 de 2011 establece que las normas que orientan a los servidores públicos encargados de diligenciar el Registro, deben interpretarse y aplicarse a la luz de los principios de favorabilidad, buena fe, prevalencia del derecho sustancial, participación conjunta, confianza legítima, trato digno y habeas data.

<sup>3</sup> El principio de enfoque diferencial, establecido en el artículo 13 de la ley 1448 de 2011, parte del reconocimiento de la existencia de poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, dentro de las cuales se encuentran los jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado que en razón a sus condiciones y características particulares requieren especiales garantías y medidas de protección por parte del Estado.





Hoja número 3 de la Resolución No 2014-452223 del 30 de abril de 2014: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4600 de 2011".

Que la Brigada Móvil N° 2 del Ejército Nacional descubrió en 1993 en la zona de influencia de la comunidad de los cinco corregimientos de Simití, varios campos minados que tenían una cantidad total de 1488 minas antipersonales. Tal instalación fue realizada por las FARC y el ELN para aislar la zona y resguardarla de la presencia de la institucionalidad militar, así como de otros actores armados ilegales, colocando en un grave riesgo a la población civil<sup>4</sup>.

Que Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar', escogió a Simití como el centro de operaciones desde el cual formaría el grupo de autodefensas del Bloque Central Bolívar (BCB), adscrito a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su primera incursión se dio el día 11 de junio de 1998, al corregimiento de Cerro Burgos. En este día aproximadamente cien paramilitares vestidos con prendas militares ingresan al finalizar la tarde por el norte del municipio de Simití al corregimiento de Cerro Burgos. Allí bloquearon el tránsito, insultan e interrogan a la población, dispararon contra algunas viviendas y buscaron a varios ciudadanos tales como ANDRÉS MEDINA, HERMES VILLAMIZAR y OLGA LUCIA PALENCIA para asesinarlos<sup>5</sup>. Como consecuencia de este hecho se generó el desplazamiento forzado de gran parte de los pobladores de la zona<sup>6</sup>.

Que acciones similares se presentaron a lo largo del municipio de Simití en los meses siguientes. El objetivo inicialmente trazado por el BCB fue desplazar a las guerrillas del sur de Bolívar, por cuanto estas habían mantenido un dominio histórico sobre la zona; pretendían controlar Simití y toda la Serranía de San Lucas antes de diciembre de 1998. Como consecuencia, se dio una fuerte confrontación entre guerrillas y autodefensas durante todo el año y se presentó una serie de éxodos masivos a lo largo de todo el sur de Bolívar durante todo el año<sup>7</sup>. Cabe resaltar que en 1998 fueron quemadas alrededor de 689 casas a lo largo del sur de Bolívar<sup>8</sup>.

Que luego de su ingreso a Cerro Burgos, las autodefensas establecen una base militar en el corregimiento de Monterrey, desde el cual proyectan la forma en que se expandirían en la zona. En su propósito restringen la circulación de los pobladores del corregimiento y aumentan los controles sobre la población civil. En este marco, 80 familias del corregimiento evaden el veto a la movilidad y se desplazan hacia el municipio de San Pablo<sup>9</sup>.

Que para fines de 1998 se instala en San Blas una nueva base militar y una escuela de entrenamiento militar por parte del Bloque Central Bolívar, con capacidad para entrenar a 300 hombres<sup>10</sup>. El corregimiento de San Blas y sus zonas aledañas se convierten en un lugar altamente controlado por los hombres de las AUC. Alias Julián Bolívar, ex jefe militar del Bloque Central Bolívar afirmó: *"La disposición del lugar permitía que desde los cerros, instaláramos los puestos de seguridad con plena visibilidad panorámica. Además, allí confluyen varias carreteras, que comunicaban con otros corregimientos y veredas, tanto para el enemigo como para nosotros"*<sup>11</sup>.

Que en el año 1999 el ELN secuestra un avión de la aerolínea Avianca que llevaba 41 pasajeros y que cubría la ruta Bucaramanga – Bogotá. Posteriormente dirigen el avión hacia el sur de Bolívar. En respuesta a esta situación, las fuerzas militares desarrollan la denominada "Operación Anaconda" entre los meses de abril y junio de 1999. En este operativo el Estado militarizó toda la zona, hizo bombardeos y realizó ametrallamientos aéreos<sup>12</sup>, viéndose nuevamente la población civil afectada<sup>13</sup>. Luego de esto, el día 7 de agosto de 1999 el Bloque Central Bolívar militariza el corregimiento de Monterrey con 110 hombres, y se dirige a la vereda El Piñal, para dar muerte a seis personas, por cuanto se presumía que habían planeado el secuestro del avión de Avianca<sup>14</sup>.

Que, entre el 16 y 18 de octubre del mismo año un grupo de paramilitares realizan un recorrido por varias

<sup>4</sup> Vd. "Descubren Plan Terrorista en el Sur de Bolívar", en: El Tiempo, 3 de junio de 1993.

<sup>5</sup> Vd. "Las masacres de 'Julián Bolívar' en el Sur de Bolívar", en: Verdad Abierta.

<sup>6</sup> Vd. "Informe sobre desplazamiento forzado en Colombia, 1999", en: Equipo Nizkor.

<sup>7</sup> Vd. "La guerra de San Lucas" en: Revista Semana, 26 octubre 1998.

<sup>8</sup> Ibid. Equipo Nizkor.

<sup>9</sup> Ibid. Equipo Nizkor.

<sup>10</sup> "Condenan a Julián Bolívar a 8 años de prisión" en: Barrancabermeja Virtual, 11 de Septiembre de 2013.

<sup>11</sup> "Paras' versión 2.0" en: Verdad Abierta, Lunes 14 de febrero de 2011

<sup>12</sup> Ibid. Equipo Nizkor

<sup>13</sup> Vd. "Nos convertimos en una máquina de matar: Julián Bolívar", en: Verdad Abierta.

<sup>14</sup> Tribunal Superior





Hoja número 4 de la Resolución No 2014-452223 del 30 de abril de 2014: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011".

veredas de Simití, en el que asesinan a cuatro personas<sup>15</sup> por cuanto son consideradas miembros o auxiliares de guerrillas. Una de las personas asesinadas es Ana Teresa Vaca Daza, a quien obligan a prepararles alimentos, queman su casa y luego la asesinan por medio de una decapitación. Finalmente empalan su cabeza para ser expuesta públicamente e intimidar a la población. Posteriormente el grupo se queda por un periodo de quince días en el corregimiento del Paraíso, tiempo durante el cual sostienen enfrentamientos con la guerrilla a diario. Transcurrido este tiempo abandonan el corregimiento y se llevan alrededor de 700 cabezas de ganado<sup>16</sup>.

Que la confrontación armada en la zona de la Comunidad de los Cinco Corregimientos de Simití se mantuvo durante los años siguientes y trajo como consecuencia un quiebre profundo en la unidad de la comunidad. Incluso el estado de violencia e inestabilidad penetró también en el ámbito del Estado, toda vez que las organizaciones comunitarias, los gobiernos locales y los partidos políticos estuvieron subordinados a los intereses de los grupos armados durante varios años.

Que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha venido alertando por varios años sobre el peligro en que se encuentra la población de Simití. El Informe de Riesgo 015 de junio de 2007 advierte sobre la situación de riesgo en que se encuentran las comunidades de la zona por causa de los grupos armados ilegales en disputa, así como por la presencia de nuevos grupos criminales que aparecieron con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas que se dio entre los años 2003 y 2006. En la Nota de Seguimiento a este Informe, NO. 018-08 del 14 de marzo de 2008 se reitera nuevamente que pese a la advertencia, el riesgo de dichas comunidades se mantiene. La nota afirma: "(...) en los municipios de San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití-Bolívar, la situación de violencia se ha venido incrementando con grave afectación de los derechos y libertades fundamentales de la población civil (...)".

Que en el año 2009 la Defensoría del Pueblo emitió la Nota de Seguimiento No. 019-09, segunda al Informe de Riesgo No. 015-07, en la que resalta que la población de la zona aún se encuentra en Alto Riesgo debido a que las guerrillas nuevamente se encuentran realizando una arremetida para reacomodarse en sus antiguos sitios de dominio, previos a la aparición de las AUC. La Nota alerta sobre un aumento en la cantidad de minas antipersonales en el territorio y prácticas de reclutamiento de adolescentes y jóvenes, entre otras actividades que ponen en riesgo a la población civil de la zona. Describe así mismo como entre algunos hechos que en el año 2009 se encontró una fosa común en Simití y se presentaron cinco combates en la zona.

Que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) presenta el 22 de junio de 2012 el Informe de Riesgo No. 008-12AI, con el cual nuevamente contextualiza y caracteriza el riesgo de la zona con categoría Alta. De nuevo señala que hay riesgo de infracciones al DIH, así como de violaciones a los Derechos Humanos de los habitantes de la zona. Afirma el informe: "[los grupos armados ilegales y las BACRIM] utilizan estos territorios como corredor de movilidad, por ser una zona privilegiada para la explotación agro minera y para el manejo de los circuitos de narcotráfico, entre el nordeste de Antioquia, los departamentos de Córdoba y Sucre, el sur del departamento del Cesar y Norte de Santander respectivamente (...) Es así como en los tres municipios [Santa Rosa, San Pablo y Simití] existe y se consolida una economía ilegal fundada además en la producción y comercialización de la coca (...)".

Que en el año 2013 el SAT publica la Nota de Seguimiento No. 011-13, al Informe de Riesgo No. 008-12<sup>a</sup>.I. emitido el 22 de junio de 2012. En este documento resalta que la situación de riesgo persiste para la población civil de los municipios de San Pablo, Santa Rosa y Simití, por cuanto los actores armados aún continúan desplegados y enfrentados, manteniendo el peligro para la población civil.

Que la intensa actividad armada desarrollada en la zona de la Comunidad de los Cinco Corregimientos de Simití trajo como consecuencia el desdibujamiento temporal de la figura del Estado, sus normas y garantías; la pérdida de legitimidad del mismo, y una limitación al desarrollo de la democracia. Adicionalmente, para el colectivo significó su desintegración por los reiterados desplazamientos forzados y la dinámica de violencia instaurada por los actores armados. Por lo tanto, las tradiciones y prácticas históricas del colectivo también se vieron afectadas, la confianza al interior del mismo se vio minada y los procesos organizativos limitados.

Que de acuerdo a los criterios de valoración de las solicitudes de inscripción de sujetos colectivos en el Registro Único de Víctimas aprobados por el Comité Ejecutivo el día 9 de enero de 2013, los hechos victimizantes ocurridos a la Comunidad de los Cinco Corregimientos de Simití y descritos en párrafos

<sup>15</sup> Centro Nacional de Memoria Histórica MASACRE DE SIMITÍ, Octubre de 1999

<sup>16</sup> Vd. Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz; Postulado Rodrigo Pérez Alzate, radicación 10016000253200680012, 30 de agosto de 2013.





Hoja número 5 de la Resolución No 2014-452223 del 30 de abril de 2014: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011".

anteriores se pueden enmarcar en las siguientes situaciones que vulneran derechos colectivos y el impacto que causó sobre la vida de la población civil, en los términos del artículo 151 de la Ley 1448 de 2011:

- **Vulneración del derecho a la seguridad:** Que la población civil de la Comunidad de los Cinco Corregimientos de Simití (Bolívar) ha sido históricamente afectada en sus Derechos Humanos por actores armados ilegales, que han tenido como práctica recurrente la infracción del Derecho Internacional Humanitario. El hallazgo y desactivación de campos minados con un total de 1488 minas antipersonales por parte de la Brigada Móvil Número Dos del Ejército Nacional en el año 1993, es un ejemplo que evidencia la vulneración del Derecho a la Seguridad de los habitantes de la comunidad, así como la profundidad y gravedad de las afectaciones a las que estaba sometida la población civil<sup>17</sup>.

- **Vulneración del derecho a la libre circulación:** Que las AUC realizaron acciones armadas que llevaron a la población a limitar o modificar su circulación en el territorio. Un ejemplo de ello es la instalación de una base militar en el corregimiento de Monterrey y las consecuentes limitaciones a la movilidad y vida de los pobladores. Esta situación trajo adicionalmente como consecuencia desplazamientos masivos, restricciones a la movilidad y por lo tanto vulneraciones al derecho a la libre circulación<sup>18</sup>.

- **Impedimento o Restricciones a la Realización de Prácticas Sociales, Económicas o Culturales:** Que acciones tales como los desplazamientos forzados o las quemas de casas realizadas por grupos armados ilegales, implicaron el resquebrajamiento de los procesos históricos de la Comunidad de los Cinco Corregimientos de Simití, por cuanto gran parte de sus pobladores tuvieron que trasladar sus lugares de residencia a otros corregimientos o municipios. Como consecuencia muchas de las Prácticas Sociales, Económicas y Culturales propias de la comunidad de se vieron afectadas e incluso desaparecidas.

- **Minas en el Territorio:** Que una característica sobresaliente de la confrontación armada en la zona de la Comunidad de los Cinco Corregimientos de Simití ha sido la presencia de minas antipersonales. El descubrimiento hecho por la Brigada Móvil Número Dos del Ejército Nacional en 1993 de varios campos minados en la zona que tenían una cantidad total de 1488 minas antipersonales evidencia la situación<sup>19</sup>. Del mismo modo, las Notas de Seguimiento y los Informes de Riesgo del SAT logran evidenciar la continuidad e incluso el crecimiento en la cantidad de Minas Antipersonales en la zona.

- **Fosas Comunes:** Que en la Comunidad de los Cinco Corregimientos de Simití los grupos armados ilegales hicieron grandes cantidades de asesinatos de personas que no hacían parte del conflicto armado interno. Así las cosas, se infiere la presencia de fosas comunes en el territorio. La Nota de Seguimiento No. 019-09, segunda al Informe de Riesgo No. 015-07 alerta sobre el hallazgo de una fosa común en el año 2009, hecho que evidencia la presencia de fosas en el territorio.

- **Restricciones a la Vida Organizativa:** Que recurrentes Desplazamientos Forzados de la población de la Comunidad de los Cinco Corregimientos de Simití resquebrajaron la vida organizativa de la comunidad, al verse obligada a abandonar en cada desplazamiento forzado cualquier proyecto que estuviera en marcha o por desarrollarse. Adicionalmente, la presencia de bases militares en el territorio deterioró la organización comunitaria. Es necesario resaltar que la recuperación del tejido social y la reconstrucción de formas de organización comunitaria implican un esfuerzo que conlleva dificultosas labores de coordinación y relacionamiento con la población civil, el Estado y el sector privado<sup>20</sup>.

Que con relación a los hechos victimizantes y vulneraciones de: **Daños a Recursos Naturales, Vulneración por parte de Actores Armados de Bienes Públicos Protegidos y Daños a la Propiedad Colectiva**, durante el proceso de valoración no se encontraron herramientas suficientes que le permitan a la Subdirección de Valoración y Registro comprobar la ocurrencia de los hechos, por lo tanto no se hará mención a ellos en el presente acto administrativo.

Por lo anterior y a la luz del principio del principio de Buena fe, se concluyó que las situaciones que conllevaron a las violaciones de derechos colectivos se enmarcan dentro del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, por lo cual es viable jurídicamente incluir a la Comunidad de los Cinco Corregimientos de Simití (Bolívar), en el Registro Único de Víctimas –RUV.

<sup>17</sup> Ibid. El Tiempo, 3 de junio de 1993.

<sup>18</sup> Ibid. Equipo Nizkor.

<sup>19</sup> Ibid. El Tiempo, 3 de junio de 1993.

<sup>20</sup> Ibid. Revista Semana, 26 octubre 1998.





Hoja número 6 de la Resolución No 2014-452223 del 30 de abril de 2014: "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011".

Que en cumplimiento del numeral tercero del artículo 41 del Decreto 4800 de 2011, frente a la mención detallada y suficiente de las rutas para acceder a las medidas de asistencia y reparación para la Comunidad de los Cinco Corregimientos de Simití, se precisa que atendiendo los artículos 230 y 231 del citado Decreto, las medidas de reparación que contendrá el Plan Integral de Reparación Colectiva, tomando como marco general lo contenido en el Programa de Reparación Colectiva, se diseñarán en conjunto entre la Unidad y el sujeto colectivo, con la participación de las entidades del Estado.

Es preciso mencionar que dado el caso en que las personas hayan obtenido el registro alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción u ocultando las que la hubiesen impedido, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas procederá de manera inmediata con la revocatoria de su inscripción en el Registro Único de Víctimas –RUV- sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar, en concordancia con los artículos 157, 198 y 199 de la Ley 1448 de 2011 y los artículos 43 y 44 del Decreto 4800 de 2011.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,


**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** **INCLUIR** en el Registro Único de Víctimas a la **Comunidad de los Cinco Corregimientos de Simití conformada por los corregimientos de Monterrey, San Blas, Paraíso, Santa Lucía y San Joaquín, ubicados en el municipio de Simití (Bolívar),** con fundamento en las razones señaladas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** **NOTIFICAR** el contenido de este acto administrativo, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, a **CESAR NORBEY GONZALEZ VELASQUEZ,** quien podrá interponer los recursos de reposición ante el funcionario que tomó la decisión y en subsidio el de apelación ante la Dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, atendiendo al artículo 157 de la Ley 1448 de 2011, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, a los 30 días del mes de Abril de 2014

  
**HEYDY POVEDA FERRO**

**DIRECTORA TÉCNICA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**